

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **LUIS ESTEBAN CRUZ RENGIFO** contra la sociedad **COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S** (en adelante DEMES S.A.S) tramitado bajo el radicado No. 05360-31-05-002-2018-00284-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

El actor pretende con la demanda, que se declare la existencia de un vínculo de naturaleza laboral con la sociedad demandada. También pretende que se declare que la terminación de la relación laboral, se dio de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador, gozando para ese momento de fuero de estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta que sufrió un accidente de trabajo.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pretende que se condene a la compañía accionada, al pago de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la indemnización por despido sin justa causa, el pago de las acreencias laborales, así como la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del CST, por el no pago de las horas extras y por la falta de entrega de los soportes de pagos de la seguridad social y parafiscales, y finalmente determinar si el actor sufrió

un accidente de trabajo que le generó una incapacidad laboral que deba indemnizar la demandada, indexación de las condenas y s costas procesales.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, relata el actor que prestó sus servicios a favor de la Compañía “DEMES S.A.” mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 22 de diciembre de 2014, desempeñando el cargo de oficios varios estando dentro de sus funciones operar la máquina de corte, sin haber recibido capacitación para el manejo de la misma.

Aduce que sus labores las desarrollaba de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los días sábados de 7:00 a.m. a 3 p.m. devengando un salario de \$633.000, sin que se le hayan cancelado las horas extras laboradas.

Cuenta que el 30 de diciembre de 2014, mientras se encontraba desarrollando las actividades asignadas, sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la amputación de la falange del dedo índice de su mano derecha, lo cual ameritó una cirugía que en definitiva disminuyó su capacidad laboral manual, advirtiendo que para el momento de los hechos no había sido inscrito por su empleador a las centrales de riesgos laborales, efectuando su afiliación de manera extemporánea.

Manifiesta que el 14 de julio de 2015, recibió un oficio suscrito por el gerente de la entidad accionada por medio del cual le finiquitaba el contrato de trabajo a partir del 11 de julio de 2015, con el argumento de que la empresa había decidido desistir de sus servicios en forma unilateral.

Finalizó contando que solicitó la práctica de un examen médico por la condición de salud que presentaba, negándosele el misma por no haber estado afiliado por su empleador a la seguridad social.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia despachó de manera favorable la pretensión concerniente a la indemnización de pérdida de capacidad laboral, absolviendo a la entidad accionada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

El *a quo* fundó su decisión, indicando que era dable concluir la existencia de un contrato de trabajo, pues quedó acreditada una prestación personal del servicio por parte del señor LUIS ESTABAN CRUZ RENGIFO en favor de la demandada, del 22 de diciembre de 2014 al hasta el 15 de junio de 2015.

Decidió que las acreencias laborales peticionadas en la demanda, a excepción de la indemnización por pérdida de capacidad laboral, se vieron afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción, ya que la obligación se hizo exigible desde el 15 de junio de 2015, contando el trabajador para iniciar la acción correspondiente hasta el 15 de junio de 2018, y la demanda fue presentada el 12 de septiembre de ese año, lo que quiere decir que no promovió la acción judicial dentro del término legal.

En lo que concierne a la pretensión de la indemnización por pérdida de capacidad laboral, indicó que esta se hacía exigible una vez se notifique el dictamen que determine la PCL del asegurado, lo cual acaeció dentro del proceso, por lo que esta pretensión fue reconocida, estando a cargo del empleador, quien no afilió oportunamente al trabajador en riesgos laborales.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por los apoderados de ambas partes.

APELACIÓN DEL DEMANDANTE.

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación, manifestando su inconformidad respecto de la prescripción, indicando que el demandante fue diligente con la reclamación elevada ante el empleador el 27 de septiembre de 2015, el 31 de julio de 2017 y el 12 de septiembre de 2018, siendo claro que la jurisprudencia laboral alude a que se debe aplicar el principio de favorabilidad, siendo diligente su poderdante al reclamar los derechos adeudados, por lo que no está de acuerdo con la aplicación de la excepción de prescripción, ya que su representado tiene el derecho a lo pretendido.

Expresa que es claro el artículo 489 del CST que reza que el simple reclamo del trabajador recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado por una sola vez, suspende el término de la prescripción, lo cual

principia a contarse de nuevo desde la reclamación por un lapso igual al determinado para la prescripción.

Dice que, si bien las pruebas de estas reclamaciones no se aportaron, el juzgado es conocedor que, desde el 25 de septiembre de 2015, su representado fue diligente y reclamó el derecho al empleador, por lo que no se debe declarar la prescripción, pues con ella se está privando al señor Cruz Rengifo de un derecho que tiene consolidado.

APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.

La apoderada de la sociedad demandada recurrió la decisión, argumentando que si bien el despacho aceptó la excepción de prescripción propuesta oportunamente en cuanto a las acreencias laborales de las prestaciones sociales, también considera que la misma debe ser aplicada para el concepto de la indemnización por pérdida capacidad laboral reconocida al demandante, debiéndose tener en cuenta para ello que la justicia ordinaria no puede desconocer la ley para este, pues teniendo en cuenta que existe un término de prescripción para las acreencias laborales este también debe ser aplicado para este concepto de indemnización.

Es claro que han pasado más de 3 años y solo con un concepto de pérdida de capacidad laboral, que fuera emitido bajo este proceso ordinario se tuvo conocimiento de la situación, debiéndose revocar esta decisión, teniendo en cuenta además que en el plenario no se pudo identificar cuál fue la parte pasiva para la cual trabajó el demandante, entonces no habría como identificar quién debe pagar esta indemnización de pérdida de capacidad laboral que se emitió dentro del dictamen, por lo que solicita que frente a este concepto también se aplique la prescripción, absolviendo de la indemnización otorgada por el despacho.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de la parte accionante presentó alegatos, en los que anota resumidamente lo siguiente:

1. El Ar: 53 de la CP de 1991 establece el derecho al trabajo su protección y la primacía de la realidad sobre las formas. En el proceso en referenciase

demonstró más allá de toda duda que mi poderdante presto sus servicios para DEMES en forma personal (24CST)

2. Que cumplía con un horario de trabajo, que recibía órdenes e instrucciones de trabajo y que nunca se le brindo un entrenamiento técnico como operador de la máquina de corte lo cual aumento el riesgo de accidente que a la postre ocurrió.
3. A si mismo se demostraron los extremos temporales de la relación laboral fueron del 22 de diciembre del 2014 al 11 de julio del 2015(art:23 CST) Prueba de ello fue la afiliación de la COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S CUYA SIGLA ES DEMES representada por el señor: FABIAN ALBERTO ZAPATA PEMBERTY a la ARL POSITIVA (LA QUE SE ANEXO) EN FORMA EXTEMPORANEA DESPUES DE HABER SUFRIDO EL ACCIDENTE Y SU NO AFILIACION A LA ARL DESDE EL COMIENZO DE LA RELACION LABORAL el no pago de las horas extras que constituyen salario durante los extremos de la relación laboral (SE ANEXARON RESIVOS) y el despido sin justa causa (SE ANEXO CARTA DE DESPIDO) dentro del expediente allegado al honorable despacho.
4. LA COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S CUYA SIGLA ES DEMES representada por el señor: FABIAN ALBERTO ZAPATA PEMBERTY desde el comienzo de la relación laboral vulnero el derecho a la SEGURIDAD SOCIAL de mi poderdante e incumplió desde el comienzo de la relación laboral con el debido pago de las prestaciones sociales como son las horas extras QUE CONSTITUYEN SALARIO puso en peligro la salud y la vida de mi poderdante al no afiliarlo a ala ARL antes de comenzar la relación laboral y al afiliarlo en forma extemporánea a la ARL así mismo lo despidió sin una JUSTA CAUZA y sin contar con el debido permiso del ministerio de trabajo a través del inspector de trabajo Prescindió de los servicios de mi poderdante sin justificar el despido. Demostró la apatía la dejadez y la indiferencia al no cancelar las horas extras que constituyen salario desde que la obligación se hizo exigible.

5. Mi poderdante desde que se hizo exigible la obligación descrita contrala

**LA COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S
CUYA**

SIGLA ES DEMES representada por el señor: FABIAN ALBERTO ZAPATA PEMBERTY fue diligente en la reclamación de sus derechos a la SEGURIDAD SOCIAL(AFILIACION A LA ARL) y a las PRESTACIONES SOCIALES (HORAS EXTRAS) prueba de ello es que la reclamación se hizo exigible desde el 11 de julio del año 2015 y mi poderdante presento las reclamaciones en el siguiente orden del cual es: **PLENAMENTE CONOCEDOR EL DESPACHO ``JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI ANTIOQUIA Y ESTA ENTERADO EL DESPACHO``** pues las reclamaciones se hicieron en las siguientes fechas:

- a. 27 de septiembre del año 2015 se presenta acción de tutela al JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI (ANTIOQUIA). Contra la COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S CUYA SIGLA ES DEMES representada por el señor: FABIAN ALBERTO ZAPATA PEMBERTY.
- b. 31 DE JULIO del 2017 se presenta por parte de mi poderdante demanda laboral al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI (ANTIOQUIA) contra LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES INDUSTRIALES S.A.S. CODEINDUSTRIALES representada por el señor ALEXANDER MARIN.
- c. 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 se presenta por parte de mi poderdante demanda laboral dirigida al JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI (ANTIOQUIA). Contra la COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S CUYA SIGLA ES DEMES representada por el señor: FABIAN ALBERTO ZAPATA PEMBERTY.

6. Igualmente, el 26 de mayo del 2021 se ANEXARON documentos al **HONORABLE TRIBUNAL PARA QUE RESPETUOSAMENTE** fueran tenidos en cuenta para dar claridad de que mi poderdante hizo las

respectivas reclamaciones de sus **SALARIOS (HORAS EXTRAS SIN CANCELAR POR LA PARTE DEMANDADA Y LA NEGLIGENCIA DE HABERLO AFILIADO A LA ARL EN FORMA EXTEMPORANEA PONIOENDO EN RIESGO SU SALUD Y SI BIEN JURIDICO TUTELABLE ``SUVIDA``**

NOTA: De las anteriores reclamaciones es plenamente conocedor el despacho **JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI (ANTIOQUIA)**.
Dentro del proceso RADICADO: **05360310500220180028400**.

Declarese que en este proceso ``NO OPERA LA PRESCRIPCION TODA VEZ QUE ESTA SE INTERUMPIO POR LAS RECLAMACIONES QUE SE HICIERON EN FORMA DILIGENTE POR PARTE DE MI PODERDANTE el señor LUIS ESTEBAN CRUZ RENGIFO según lo establecido en el Artículo 489 del CST

Sentencia No. T-149/95

El artículo 53 de la Carta Política consagra el principio fundamental de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales - entre ellos el salario -, y prohíbe que, a través de la ley, de los contratos o de los acuerdos y convenios de trabajo, puedan menoscabarse la libertad, la dignidad o los derechos de los trabajadores.

La Sala de Descongestión No. 3 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que **la imposición de la sanción moratoria por el incumplimiento de la obligación del empleador de pagar salarios y prestaciones sociales al término del vínculo laboral no opera de manera automática ni axiomática**, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor.

La corporación también afirmó que la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo **procede cuando el empleador deudor desalarios y prestaciones sociales, al terminar el contrato de trabajo, no da razones satisfactorias y justificativas de su conducta.**

5. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si para la fecha que el actor formuló la demanda se encuentra o no prescrita la acción para demandar los derechos laborales que surgieron por la relación laboral que sostuvo con la parte demandada.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

Se ocupará esta Sala del estudio de los recursos, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Para efecto de desatar la alzada, es necesario manifestar primeramente que a pesar que la demandada DEMES SAS., en la apelación aduce que no se pudo identificar cuál fue la parte pasiva para la cual trabajó el demandante, no le asiste la razón por cuanto a pesar que obra en el proceso una carta de terminación del contrato de trabajo de actor, con membrete de una empresa denominada CODEINDUSTRIALES SAS, los testigos manifestaron que esta empresa y DEMES SAS son la misma empresa, siendo además relevante que fue la demanda DEMES SAS contra quien se produjo la condena la indemnización por el accidente de trabajo, la que afilió al actor al sistema de riesgos laborales el 31 de diciembre de 2015 (fl.18), día siguiente de haberse producido el accidente de trabajo, lo que no nos deja duda que el demandante al menos para la fechas del accidente laboraba con DEMES SAS.

Establecido lo anterior, se tiene que cuando se declara la existencia de un contrato de trabajo, el Juez está habilitado para determinar la viabilidad de las prestaciones laborales correspondientes que hubieren sido solicitadas por la parte actora, sin embargo estando presente sus presupuestos fácticos que otorgan el derecho el juez la debe decidir sobre la excepción de prescripción si fue formulada, sin importar los

derechos que se reclamen por cuanto no es potestativo del Juez declarar o no la prescripción, salvo cuando se trate de derechos tendientes a alcanzar algún tipo de pensión en los que la acción no prescribe.

Es así, que, respecto del tema de la prescripción de la acción para reclamar derechos laborales, la jurisprudencia de la SCL CSJ ha precisado que ella se rige conforme a las preceptivas de los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS, cualquiera fuera el derecho o de la seguridad social que se reclame, salvo en los casos que las normas legales expresamente tengan un término especial para determinado derecho.

Además, la jurisprudencia de nuestro órgano de cierre, ha precisado que la prescripción de los derechos se cuenta desde que los mismos se han hecho exigibles, que en el caso de derechos laborales no puede superar la culminación de la relación laboral, es decir que para reclamar cualquier derecho laboral el termino máximo para demandar es los tres (3) años a que hacen mención los artículos 488 del CST y 151 del CPT, se repite contados desde que culminó la relación laboral.

En este caso, es claro que la parte actora, independientemente de los derechos laborales que pretendía en la demanda, los podía exigir y solicitar su reconocimiento a partir del momento en que terminó su vínculo laboral con la accionada, lo cual acaeció según lo determinado por la juez de primera instancia, el 15 de junio de 2015, soportando su decisión en el recibo de nómina allegado por el accionante al plenario, del que se colige que el empleador “**DEMES S.A.S**” efectuó el pago del ciclo 15 de junio de 2015, por 104 horas ordinarias laboradas, que equivalen a 15 días, cual reposa a folio 22 del expediente digital (01Expediente)

Así las cosas, estando acreditado que el vínculo laboral del actor terminó el 15 de junio de 2015, es claro que a partir de ese momento se hacían exigibles los derechos laborales pretendidos, distinto al de la indemnización por accidente laboral como más adelante se explicará, sin que se evidencie en el plenario que hubiere realizado alguna reclamación en tal sentido a la demandada, pues aunque la parte activa en las alegaciones finales y en el recurso de apelación señala que se interrumpió la prescripción con las reclamaciones y acciones de tutela que interpuso frente al demandado, en el plenario no se arrimó prueba en tal sentido, por lo que no tiene cabida su argumento. Así que al haberse formulado la demanda el 12 de

septiembre de 2015, como se lee del sello de recibido de la administración judicial (Fl. 3), es claro que habían pasado los tres años que señalan los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS que tenía el actor para impetrar la demanda en procura del reconocimiento de los derechos laborales que se desprendían de la relación que sostuvo con la demandada, por lo que se encuentran afectados por el fenómeno prescriptivo los derechos reclamados por el recurrente, no siendo el principio de favorabilidad que concierne en materia laboral y de la seguridad social, una circunstancia que permita desconocer los procedimientos previamente establecidos, entre ellos, las consecuencias del no ejercicio de la acción en tiempo para reclamar un derecho, porque si se hiciere ello, se conculcaría el derecho fundamental al debido proceso y la seguridad jurídica.

Ahora en los alegatos el apoderado del actor aduce que, el 26 de mayo del 2021 se anexaron documentos al Tribunal para que fueran tenidos en cuenta para dar claridad de que mi poderdante hizo las respectivas reclamaciones de sus salarios (HORAS EXTRAS SIN CANCELAR POR LA PARTE DEMANDADA Y LA NEGLIGENCIA DE HABERLO AFILIADO A LA ARL EN FORMA EXTEMPORANEA PONIOENDO EN RIESGO SU SALUD Y SI BIEN JURIDICO TUTELABLE ``SU VIDA``, sin embargo, revisado el expediente no hay documentos que se hayan aportado por el apoderado de demandante al Tribunal en tal sentido. Pero es más si se hubieran aportado, dicha prueba sería manifiestamente extemporánea, no pudiéndose decretar como prueba en esta instancia por cuanto la parte demandada no habría tenido la oportunidad de debatirla, lo que vulneraría los derechos de contradicción y defensa.

En razón a las consideraciones de hecho, probatorias y de derecho descritas en precedencia, la sentencia apelada que declaró probada la excepción de prescripción de los derechos reclamados por el actor relativos a la indemnización por despido sin justa causa, la sanción contemplada en el art. 26 de Ley 361 de 1997, el pago de horas extras y las demás consecuenciales, debe ser confirmada.

Continuando con el análisis de los puntos objetos de inconformidad pregonados por la apoderada de la entidad accionada, tenemos que esta pretende que la excepción de prescripción también sea aplicada a la pretensión de indemnización por pérdida de capacidad laboral.

Lo primero que debemos indicar es que no se discute en el trámite, que el 14 de enero de 2020, la Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió el Dictamen No.084393-2019, por medio del cual se le informó al señor Luis Esteban que presentaba una Pérdida de Capacidad Laboral del 12,07%, de origen laboral, con fecha de estructuración 30/12/2014, notificado el **29 de enero de 2020** (fls.176 a 181)

Ahora bien, frente al tema concerniente a la calificación de la pérdida de capacidad laboral, la Corte Constitucional en la Sentencia T-873 de 2013, entre otras, ha considerado como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así que, puede ocurrir que en un primer momento la afectación padecida, independientemente de si es consecuencia de un accidente o enfermedad específica, no genere incapacidad alguna. No obstante, con el transcurso del tiempo, se pueden presentar secuelas que agraven la situación de salud de la persona, lo que podría dar lugar a la valoración de su pérdida de capacidad laboral, con el fin de establecer, precisamente, las verdaderas causas que originaron la disminución de su capacidad de trabajo.

De acuerdo con ello, el derecho a la valoración de la pérdida de capacidad laboral: *“no se encuentra supeditado a un término perentorio para su ejercicio, toda vez que la idoneidad del momento en que el afiliado requiere la definición del estado de invalidez o la determinación del origen de la misma, no depende de un término específico, sino de sus condiciones reales de salud, del grado de evolución de la enfermedad o del proceso de recuperación o rehabilitación suministrado.*

El mero transcurso del tiempo no obsta el acceso al dictamen técnico que permitirá establecer las prestaciones económicas causadas por el advenimiento del riesgo asegurado, independientemente de que este tenga origen en una enfermedad profesional, accidente laboral o en una afección de origen común” (véase la sentencia T-873 de 2013).

En ilación a lo anterior, considera este cuerpo colegiado que el derecho a la calificación de la pérdida de capacidad laboral no se ve afectado por el fenómeno extintivo de la prescripción, pues la prescripción recae sobre el derecho al pago de la indemnización, cuando previamente ha existido una calificación y la persona dentro de los 3 años siguiente no se presenta a reclamar la misma, como lo preceptúa el artículo 22 de la Ley 1562 de 2012, el cual reza:

“... PRESCRIPCIÓN. Las mesadas pensionales y las demás prestaciones establecidas en el Sistema General de Riesgos Profesionales prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que se genere, concrete y determine el derecho...” Subrayado propio de la sala.

Es decir, que el término de prescripción para reclamar las prestaciones económicas y asistenciales por accidente de trabajo o enfermedad profesional se configura desde el momento en que se le define la PCL que tenga el trabajador, es decir, cuando le es notificado el dictamen definitivo de su invalidez o pérdida de capacidad laboral.

En el presente caso, tenemos que la notificación del experticio que determinó la pérdida de capacidad laboral del accionante fue notificada en el transcurso de este litigio, esto es el 29 de enero de 2020, por lo que la Sala considera que no se encuentra configurado el término trienal de la prescripción, no siendo entonces de recibo el argumento expuesto por la recurrente de la entidad acciona, asistiéndole derecho al accionante al pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial, como consecuencia del accidente de trabajo, al haberle generado una disminución parcial, pero definitiva en alguna de sus facultades para realizar su trabajo habitual.

Conforme a las razones expuestas, la sala procederá a confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia, por no asistirle razón a los recurrentes en sus apelaciones.

Sin costas en esta instancia por haber sido vencidas ambas partes en el recurso de apelación.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR INTEGRAMENTE la sentencia del 21 de octubre de 2020, proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, promovido por el señor **LUIS ESTEBAN CRUZ RENGIFO** contra la **COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE EMPAQUES ESPECIALES S.A.S.**

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fd0eba2c5d2b954937c8dc0620b40960cf497d58ac664655d3f0d1cbd7ad6d32**

Documento generado en 26/05/2023 01:01:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>